

Resumen

El presente artículo presenta parte del desarrollo alcanzado en el marco de nuestra investigación acerca del rol político de las organizaciones de desocupados en nuestro país. En este espacio presentamos la descripción de los diferentes “momentos” políticos por los que el movimiento de desocupados ha transitado: en su pasado más reciente, durante el gobierno de Eduardo Duhalde cuando las organizaciones de desocupados experimentan un crecimiento explosivo, y en la actualidad, cuando ante la asunción del gobierno de Kirchner, afrontan singulares dilemas y desafíos. Por último, exponemos, brevemente, algunas consideraciones acerca de las posibles salidas que se presentan para esta novedosa forma de representación surgida entre uno de los sectores más postergados e invisibilizados de nuestra sociedad.

Palabras clave: movimientos de desocupados; rol político.

Introducción

Varios años atrás en la Argentina, el creciente proceso de marginación y exclusión social -determinado por una crisis económica estructural-, tuvo como indicador incuestionable el mayor índice de desempleo de toda la historia nacional.

Junto con esta realidad, se asistió a una situación de crisis de representatividad en todos los ámbitos de la vida política y social de una profundidad inédita en Argentina, cuyos síntomas se podían observar en el crecimiento del abstencionismo electoral, el voto en blanco o impugnado, la opinión negativa sobre las organizaciones políticas y sectoriales y sus dirigentes, sobre el funcionamiento de las instituciones estatales y las políticas gubernamentales y también en la forma de la protesta, que asumió novedosas manifestaciones de acción y organización, tanto para la defensa de intereses sectoriales como para la expresión de proyectos políticos de carácter más general.

Una de estas nuevas formas es la que encuentra un sector de los desocupados, expresada a través de distintas organizaciones y movimientos.

La emergencia de movimientos u organizaciones de desocupados ha ido ganando importancia en la escena de la vida política nacional, alcanzando la necesaria permanencia como para constituirse en un fenómeno novedoso, tomando la popularizada definición de “movimiento piquetero”. Dicho crecimiento ha sido no sólo en términos de su relevancia cuantitativa sino también en relación con proceso de desarrollo cualitativo de algunas de dichas experiencias.

Es constatable que los movimientos de desocupados han venido ocupando una parte importante de la escena política argentina. Se puede decir que, quizás favorecido por una sobredimensión mediática y por la disminuida presencia del movimiento obrero organizado, por momentos ha cumplido el rol de ser uno de los interlocutores socialmente reconocido para “hablar de pobreza”.

Aquí nos interesa contribuir al análisis de las características que posee esta novedosa manera de representación de los desocupados nucleados en dichas organizaciones, centrándonos en la descripción de los “momentos” políticos del surgimiento de este movimiento y de la situación actual en la que se encuentra inmerso.

La consolidación de estos movimientos, como estructuras organizadas que funcionan como interlocutores de amplios conjuntos de personas ante el Estado, sus múltiples y cambiantes localizaciones en el espacio político nacional y su paso por el actual momento de transición, nos abre interrogantes y desafíos para el análisis que aquí nos proponemos abordar.

Contexto político del “explosivo” crecimiento de los movimientos de desocupados

Si bien es cierto que la irrupción de la desocupación como problemática social se manifiesta de modo contundente promediando la segunda gestión del presidente Carlos Menem, a mediados de la década del noventa, el mayor desarrollo de los movimientos de desocupados como actores políticos se plasma en las postrimerías del gobierno de la Alianza, que encabezaba De La Rúa y se consolidan como tales, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en el breve gobierno de Eduardo Duhalde, luego de la crisis económica y política del 2001.

Los acontecimientos que tuvieron lugar en los años 1996 y 1997 en las localidades de Cutral-Co en la provincia sureña de Neuquén, primero, y más tarde, en las vecinas ciudades de Mosconi y Tartagal, en Salta, fueron los que pusieron de manifiesto en el escenario político la problemática de la desocupación. Estas primeras puebladas enrolaban a la mayoría de los habitantes

del lugar, puesto que se trata de ciudades que se han formado en torno al crecimiento de las empresas estatales, luego privatizadas, y como tales eran conscientes de su ocaso ligado al desguace de las mismas. Una tradición de sindicalismo enlazado a la promoción de las ciudades fue la base de sustento de estos acontecimientos.

La respuesta que dio el gobierno de Menem fue la creación del plan social de empleo denominado Plan Trabajar, que consistía en subsidios a la desocupación mediante la contraprestación de servicios en tareas de trabajo comunitario como bacheos, desmalezamiento, atención de plazas, etc.

La contundencia de estos hechos en los lugares más remotos de la geografía nacional, el comienzo de la baja de consenso del gobierno de entonces, unido a la legitimidad del reclamo reconocido por amplios sectores de la sociedad y la inexistencia de formas colectivas nacionales que pudieran articular el creciente descontento contra el gobierno, convirtieron a estos reclamos en abanderados de la oposición social. En este último sentido es necesario resaltar el hecho de que el actor que históricamente ha actuado como articulador de la protesta social, las estructuras sindicales, había sufrido durante el primer gobierno menemista un proceso de desestructuración de una efectividad sin antecedentes en nuestro país; la hasta entonces central única de los trabajadores, la Confederación General del Trabajo (CGT), protagoniza un repliegue claramente confirmado a través del fracaso de sus intentos de resistencia frente a las políticas privatistas del gobierno, quitas de conquistas gremiales históricas y, por supuesto, despidos masivos en empresas y fábricas de capitales privados y públicos, además de la destrucción de economías regionales que motivaron, en parte, el brusco ascenso de la desocupación (1).

Más tarde, con la Alianza en el gobierno, el movimiento obrero organizado recupera, en parte, la iniciativa de la protesta, en cerrada oposición a las propuestas que se formulaban desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) como planes económicos sustentables.

Sobre el final del gobierno de la Alianza se había consolidado un acuerdo entre la Central de Trabajadores Argentinos (CTA, que nuclea gremios principalmente estatales y docentes), el MTA y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en una Mesa de Enlace que lograba nuclear a todos los actores contemporáneos de la protesta. Simultáneamente, comienzan a articularse en el Gran Buenos Aires, a expensas -en algunos casos- de organizaciones políticas de izquierda, numerosos movimientos de desocupados. La crisis de diciembre de 2001, que provoca el precipitado final del gobierno de De La Rúa, ha sido ya profusamente abordada por las distintas áreas de las ciencias sociales y no es objeto de este trabajo, más que a los efectos de contextualizar la conformación de los movimientos de desocupados como actores políticos destacados en la protesta social (2).

Sólo diremos aquí que fue precisamente la compleja situación de fragilidad institucional, de quiebre de referencias históricas y tradicionales en el plano social y político, de orfandad política generalizada, es decir, fue el contexto de crisis de legitimidad política lo que impuso a Eduardo Duhalde, quien asume el gobierno en enero de 2002, la tarea de contener la protesta social y encauzar la profunda desobediencia civil que se producía por aquellos días entre ahorristas estafados por las políticas del anterior gobierno, sectores medios empujados a la pobreza y masas de desocupados a expensas de las propuestas organizativas que ya mencionamos.

Así se produce el crecimiento explosivo de las agrupaciones de piqueteros que, por un lado pasan, de alguna manera, a ocupar el espacio vacío dejado por un sector de las organizaciones gremiales, quienes se repliegan hacia la política de negociaciones a nivel superestructural e institucional y; por otro lado, ganan la facultad de consolidar las formas de protesta que protagonizan, conquistando importantes cuotas de planes de empleo a partir de movilizaciones y cortes de calles. Una formidable maquinaria de asistencia social desde el Estado Nacional y estados provinciales se descargó sobre los grandes bolsones poblacionales con lo cual comenzaron a cobrar significación política las organizaciones de desocupados del territorio bonaerense y porteño. Más de un millón de planes fueron distribuidos entre las agrupaciones de desocupados y la vieja estructura clientelar del Partido Justicialista de los municipios, logrando así encauzar orgánicamente con interlocutores claros la problemática de los más desposeídos; aunque en rigor se trataba de soluciones para una pequeña porción de los desocupados.

También esta política es la que alienta a las agrupaciones de desocupados a ganar la calle cada vez con mayor cotidianidad en el afán de conquistar mayores beneficios. Ya por entonces existe una clara diferenciación entre el tándem que conforman la CCC y la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), como estructura residual de la Mesa de Enlace ya mencionada, con el resto de las organizaciones, diferencia que se manifiesta básicamente en el perfil más institucionalizado de los primeros, distante del corte entre disruptivo e insurreccionalista del resto.

El 26 de junio de 2001 es uno de los puntos de inflexión en la historia del desarrollo de los movimientos de desocupados, cuando el gobierno de entonces resuelve impedir los cortes a los puentes de acceso a Capital Federal que habían anunciado los sectores más "duros" de los agrupamientos piqueteros, monta un imponente operativo policial que se enfrenta a las columnas de desocupados y deja un saldo de centenares de heridos, decenas de ellos de bala y dos militantes de la CTD-AV muertos, fusilados por la policía de la provincia de Buenos Aires como se comprobó posteriormente.

El objetivo era terminar con los cortes, debilitar al creciente movimiento piquetero y recuperar el margen de gobernabilidad puesto en duda desde diciembre de 2001. Podemos decir que, en ese sentido, el gobierno logró en términos relativos lo que se había propuesto, desde el 26 de junio en adelante los cortes mermaron notoriamente. Salvo contadas excepciones, fundamentalmente en el interior más rebelde y algunas organizaciones de la provincia de Buenos Aires (3), en general los movimientos de desocupados eligieron la movilización, la marcha, como forma de manifestación.

En los cortes del interior del país ya habían tenido lugar duras represiones a las protestas sociales que dejaron saldos de muerte y presos, pero los hechos del Puente Pueyrredon se producen a pocos kilómetros de la Casa Rosada, en un país históricamente centralista como es la Argentina y ante estructuras organizadas y con un poder importante de movilización e injerencia política.

Una de las teorías en boga es que esta jornada significó el desbaratamiento de las intenciones de continuismo presidencialista de Duhalde; pero, como dijimos, también fue el paso de mayor efectividad por parte del gobierno para comenzar un proceso lento, pero firme, de descompresión del conflicto y recuperación del control de la protesta callejera.

La asunción de Kirchner al gobierno constituye, a nuestro entender, el último jalón en dicho proceso. En este sentido, una de los primeros objetivos del nuevo presidente es la construcción de un amplio espectro de apoyo y consenso que vaya más allá de la clientela del PJ bonaerense. "Transversalidad" es el nombre con que se define esta intención de construcción de consenso político. En esa maniobra comprometieron a importantes estructuras de desocupados que hasta los últimos días del duhaldismo habían estado enrolados en los denominados comúnmente por los medios de comunicación "sectores duros" de oposición y protesta, la lista de movimientos y organizaciones enteras que pasaron a formar parte orgánica del gobierno es extensa.

Por último, y adelantándonos a lo que desarrollamos en el apartado siguiente, observamos un notable cambio en la estrategia gubernamental del tratamiento del conflicto a partir de mediados del año 2005, que se manifiesta en un recrudescimiento de los instrumentos represivos y de control sobre diversas expresiones del movimiento popular.

El gobierno de Néstor Kirchner y los piqueteros

La relación con el Estado: entre los palos y los planes

Con respecto a la relación que ha caracterizado a los movimientos de desocupados con el Estado, nos concentraremos en la etapa que se abre a partir de la asunción del actual presidente de la nación, Néstor Kirchner. Y la consigna de este gobierno ante la problemática de los piqueteros fue clara y precisa: *Ni palos ni planes*, y con esa impronta construyó su "comité de crisis" o gabinete paralelo abdicando de medidas represivas de la protesta callejera, pero a la vez siendo tajante respecto de no seguir contribuyendo al desarrollo de las organizaciones de desocupados. Como ninguno de sus antecesores, el gobierno de Kirchner tomó el tema de los piqueteros y decidió *operar* sobre sus organizaciones a fin de cooptarlas o debilitarlas.

A los efectos de construir lo que llamaron "diálogo", Oscar Parrilli fue designado junto a otros actores como Rafael Follonier (viceministro de Interior), Pedro Cámpora (asesor en jefe del Ministerio de Trabajo) y, en algunas ocasiones, Aníbal Fernández (ministro de Interior), para llevar adelante las relaciones con las organizaciones sociales: "las llamamos así porque reconocemos su rol, antes que destacar uno de sus métodos, el piquete" (4).

Por decisión del Banco Mundial, que es el organismo que financia mayoritariamente los planes Jefes y Jefas de Hogar, éstos han quedado congelados desde finales del gobierno de Duhalde. No obstante y a pesar de las directivas aparentemente férreas del presidente Kirchner, se calcula que cerca de 100.000 planes alternativos fueron distribuidos en los primeros meses de la gestión kirchnerista (5).

Promediando el año 2003 el aparente encauzamiento de la protesta social hacía agua por todos partes. Por un lado, la decisión de otorgar beneficios discrecionalmente a los grupos que pactaban con el gobierno provocó una radicalización de la conflictividad de los opositores que veían crecer a los sectores piqueteros oficialistas a costa de ellos mismos. Por otro, la propia sequía de conquistas, abonaba a los movimientos de desocupados a redoblar los desafíos en el intento de que el poder ceda en algo a sus reivindicaciones.

Así, un hito importante en esta pulseada fue el acampe en Plaza de Mayo de mediados de agosto de 2005 cuando por 48 horas la Unidad Piquetera que nuclea a CTD-AV, MTR-CUBa, PO, CCC, MTD, etc. puso en práctica esta suerte de piquete frente a la Casa de Gobierno.

La respuesta del gobierno fue por demás elocuente: ninguna. Ningún funcionario se acercó a establecer un canal de diálogo con

los piqueteros y, por el contrario, el Ministro del Interior que ofició de vocero gubernamental decretó en los diarios nacionales del 17 y 18 de agosto que “no hay más piqueteros, se trata de partidos de izquierda que buscan trascender”.

Creemos que esta afirmación sintetiza, de alguna manera, la postura del gobierno frente a la problemática actual del movimiento piquetero: quitarle protagonismo, trascendencia, revestirlo de las formas más rechazadas por la sociedad como “aparato” con el que actúa la izquierda, como movimiento ilegítimo, lejos de las “necesidades reales” de la gente.

Por otro lado, es innegable que la posición de presión y capacidad de despliegue político del movimiento piquetero ha venido decayendo considerablemente.

Podemos decir que este proceso obedece a múltiples factores entre los que se encuentran razones internas y externas a las propias organizaciones de desocupados. En cuanto a las primeras, podemos afirmar que los piqueteros se han debilitado, signados por los ya conocidos males que acarrea su fragmentación, aislamiento y pérdida de la capacidad para generar alianzas o acuerdos con otros sectores sociales. Por el lado de las razones que exceden a los propios piqueteros, podemos observar que los cambios que han ocurrido en el escenario político nacional reconfiguraron los niveles de consenso con los que cuenta el gobierno, amén de lo cual y, junto con el apoyo de los medios masivos de comunicación, se llevaron adelante campañas sumamente agresivas de desprestigio de las experiencias de los desocupados organizados.

La última vuelta de tuerca de este proceso lo constituye el anuncio y la puesta en práctica de la reestructuración de los planes sociales, que incluye el refuerzo del Plan Familias y un seguro de empleo para quienes se capaciten y busquen trabajo. La intención es que los nuevos programas absorban a quienes actualmente cobran 150 pesos con el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (6).

Este anuncio fue realizado por el gobierno rodeado de dirigentes piqueteros afines, que dieron un apoyo político significativo al anuncio. Lo que no puede dejar de verse tras esta propuesta es que la intención, además, es quitarle los resortes de control de “cupos propios” a los movimientos de desocupados.

La alternativa represiva

El primer antecedente que podemos encontrar del viraje en la política, en torno a la posibilidad de recurrir a mecanismos represivos para contener la protesta social por parte del gobierno de Kirchner, se observa cuando, a fines del año 2003, el por entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, radica una denuncia judicial contra un grupo de dirigentes de agrupaciones de desocupados que durante diez o doce horas habían bloqueado las puertas del ministerio en cuestión. Se trataba de dirigentes y agrupaciones de poca gravitación en el universo piquetero (7).

Por estos días se hizo también el anuncio de la iniciativa de la “Brigada antipiquetes” (8), integrada por policías que no portarían armas de fuego, lo cual confirmaba el inicio de las maniobras de viraje de la política de contención de la protesta social que se venía desarrollando desde el ámbito estatal.

El bloqueo del Puente Pueyrredon, el siguiente 26, impidiendo a los Movimientos de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD-AV) y al Frente Popular Darío Santillán (FPDS) hacer su manifestación habitual de los días 26, con un desproporcionado operativo de Gendarmería Nacional, y enfrentando justamente a uno de sus hasta entonces habituales interlocutores, mostró la verdadera naturaleza política de la medida: se trataba de subir la apuesta en la nueva política de recuperación de los márgenes de control de la protesta callejera.

Lo que siguió es historia conocida, con los tres viernes consecutivos donde el gobierno movilizó miles de efectivos policiales a los efectos de impedir el ingreso a la Plaza de Mayo de manifestaciones de piqueteros, otras manifestaciones donde se mezclaban estudiantes y piqueteros, y manifestantes contra la llegada al país de George Bush, presidente norteamericano (26 de mayo), para finalmente anunciar que “habrá que pedir autorización” para manifestarse en la Plaza histórica, obturando y vedando el libre acceso al espacio público, con todo lo que ello implica.

Desde el gobierno se demostró claramente la capacidad operativa represiva que tiene y la firmeza de la voluntad política de cambiar el estado de cosas. De hecho, mientras el gobierno lo dispuso los piqueteros no pudieron avanzar hacia la plaza, poniendo a prueba el grado de consenso de la política propia, en contraste con el aislamiento aparente que sufrieron las manifestaciones.

Ya estaban en prisión los 16 manifestantes capturados durante los incidentes de la Legislatura porteña (9) y los 9 piqueteros del 31 de agosto del 2004. Con estas muestras de firmeza estatal y policial estrenó Aníbal Fernández su nuevo cargo al frente de la cartera política del gobierno. Este momento puede ser analizado como el principio del fin de la táctica gubernamental en materia de contención de conflictos sociales callejeros hasta entonces.

Todo esto con las declaraciones de Hebe de Bonafini, como telón de fondo, contra sus otrora admirados piqueteros diciendo: “Nos preocupa que los piqueteros sigan estando en las calles, cortando subterráneos, haciendo este tipo de reclamos y exigencias sin

tener en cuenta que ha llegado un momento diferente”, agregando que, los piqueteros “dejaron hacer al ex presidente Carlos Menem y al ex presidente Fernando De La Rúa todo lo que quisieran, hasta llegar a este caos espantoso que es el país, y sin embargo, se le pide a este Presidente que tiene 150 días de gestión y que ha hecho tantas cosas, que haga todo”.

Entre el discurso y la realidad

Por lo anteriormente señalado y considerando que este es el gobierno constitucional que esgrime el triste récord de ser quien más presos políticos ha tenido (cerca de 50 a principios de septiembre de 2004, todos capturados en el marco de manifestaciones, cortes o toma de establecimientos en reclamo de reivindicaciones o protestas; y cerca de cuarenta en mayo del 2005) y atendiendo a su impronta pública que lo presenta como acérrimo defensor de los Derechos Humanos y lo muestra dialoguista con gran parte de los organismos y personalidades defensoras de los Derechos Humanos, es que concluimos que entre la realidad tan penosa de persecuciones y criminalización de la protesta y el discurso oficial de reivindicación de los Derechos Humanos, hay una brecha indisimulable a la hora de analizar la actual situación.

Los desocupados, actores de la protesta social, representan el sector más vulnerable de la población desde todo punto de vista. Sólo basta con observar su condición de criminalizables por “portación de rostro”, eternos demorados por averiguación de antecedentes. “Estas habituales víctimas de la criminalización primaria, pero sobre todo secundaria, aparecen nuevamente en las páginas de los diarios, pero, y he aquí la novedad, no en las páginas policiales sino en las políticas” (Roldán y Hnatiuk, 2004). Este gobierno no sólo ha “judicializado” la protesta social en términos de, con el Código Penal en la mano, pretender limitar los contenidos y las formas de la protesta social provocando una situación de cientos de procesados; sino también ha ejecutado lo que se conoce como “criminalización”, llevando directamente a la cárcel a decenas de manifestantes durante un tiempo considerablemente absurdo, más aun teniendo en cuenta la naturaleza de las imputaciones que a la postre terminan indefectiblemente en absoluciones o falta de méritos.

Esto contemporáneamente a una agresiva política de reivindicación de la “lucha de los 70”, donde el presidente y su esposa, la senadora Fernández de Kirchner, se reconocen como parte de “esa generación de soñadores”.

Así, con el Jefe de Estado Mayor de las FFAA descolgando los cuadros que asombrosamente todavía presidían numerosos salones oficiales con las imágenes de los dictadores argentinos; con los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo luciéndose en cuanto acto oficial se haga; con discursos muy fuertes, impensados e impensables en otros gobiernos, contra los genocidas y contra los responsables intelectuales y económicos de la Dictadura del 76; ha construido una urdimbre que le otorga un alto nivel de legitimidad y que eclipsa la posibilidad de mensurar objetivamente su condición de “criminalizador” de la protesta.

Volvemos a señalar la posición tomada por Hebe de Bonafini, puesto que se trata de una figura emblemática de los derechos humanos en nuestro país, representante habitual de las ideas más intransigentes y combativas en la materia, pero que en la actualidad ha abandonado para siempre las históricas Marchas de la Resistencia, entendiendo que ya no hay enemigos sino amigos en la Rosada, según declaró en todos los medios de prensa la titular de Madres en la “última marcha de la resistencia” realizada en diciembre de 2005.

Todo esto constituye un escenario novedoso que aún no ha sido abordado desde el análisis científico y que no sólo es sorprendente sino que ha generado varios hitos históricos en las conductas de los organismos de DDHH. Como pocas veces los presos políticos encuentran indiferencia por gran parte de éstos, exceptuando a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA).

Las políticas públicas: algunos de sus dilemas

No es nuestro objetivo analizar en forma profunda las diversas modalidades y características que ha asumido la política social del Estado argentino en relación con los problemas que aquejan a nuestra sociedad, pero sí creemos necesario identificar dos grandes ideas que permiten entender el cambio de rumbo que se puede observar en el gobierno actual del país respecto al enfoque de las políticas sociales llevadas adelante.

Nos referimos al enfoque universalista o focalizante de las políticas sociales en general y, específicamente, de las políticas destinadas a atender la problemática laboral.

El argumento para poner en práctica políticas sociales con un criterio de focalización responde a varias argumentaciones desde los organismos de gestión estatal, por un lado, se considera dentro de una estrategia que apunta a contener el gasto, evitando derroches; por otra parte, apunta a mejorar los servicios y optimizar la gestión del Estado, permitiendo que dichos servicios alcancen efectivamente a los grupos que más lo necesitan.

Es claro que debe encontrarse el modo de que estos programas, en general de corto plazo, integren y refuercen los programas

sectoriales de más largo alcance. No obstante, podemos observar que existe una fuerte tendencia por parte de las sucesivas gestiones gubernamentales de anular los criterios universalistas para la puesta en marcha de la política social.

Podemos afirmar que en Argentina hasta el 2002, las políticas sociales fueron focalizadas de acuerdo a cada problemática (alimentaria, de salud, de educación, etc.), en dicho año se comienza una serie de discusiones en función de la universalidad de las políticas sociales, sobre todo a partir de la incorporación del Plan Jefes y Jefas de Hogar (JyJH), que consiste en un programa que incluye a todo aquel desocupado que a partir de una atribución como es la de tener hijos, posee el derecho a un subsidio que persigue garantizar un ingreso mínimo de subsistencia. Esto se da en función de un contexto de enorme crisis y grave emergencia económica y de fuertes críticas y debates acerca del monto del subsidio con el cual se pretende alcanzar dicho "ingreso mínimo", los criterios y formas que asume la distribución y asignación de dicho beneficio y, por supuesto, el alcance limitado que tiene en términos cuantitativos.

Tomaremos algunas ideas de un artículo de Pablo Ernesto Pérez (Pérez, 2006), donde el autor plantea una idea similar. Considera que el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados pareció inaugurar el concepto de redistribución universal del ingreso para todas las personas, más allá de su situación de inactividad en el plano de la producción (contrariamente a lo que expresan las políticas de asignaciones de la mano de los puestos de empleo en relación de dependencia).

No obstante, se puede observar claramente que el camino elegido, finalmente, no fue ese. Desde hace ya un tiempo no se realizan incorporaciones y sólo se aceptan las bajas al programa, abandonándose el moderado perfil universalista que tuvo el programa en sus orígenes. La decisión de restringir el programa hasta su disolución plantea un dilema ante la necesidad de un programa de ingresos que incluya a la gran cantidad de familias en situación de pobreza, en el marco de una situación social que sigue siendo grave.

"El monto de recursos necesarios para un programa de ingresos que permita superar la indigencia y/o la pobreza generalizada no se encontraría fuera de las posibilidades materiales de la economía Argentina (Pérez, Féliz y Toledo, 2004) pero probablemente tornaría inviable la estrategia de generación de superávit fiscal actual. Recordemos que el manejo de las cuentas públicas fue central para lograr, y lo es aún para mantener, los equilibrios macroeconómicos básicos: el ajuste fiscal durante la recuperación fue del orden del 9.2% del PBI (Rapetti, 2005)" (Pérez, 2006:9).

Con el abandono de la concepción de ciertas políticas públicas "universales" y su reemplazo por un modelo de política pública focalizada, se puede afirmar que el Estado terminó de optar por aplicar una política de "parches" donde se producen los mayores daños de la transformación estructural.

Por último, creemos oportuno hacer mención aquí a las propuestas que en torno a la idea de ingreso universal (tomando diversos nombres según quien la formule: ingreso ciudadano, renta básica, etc.) han sido desarrolladas en los últimos tiempos en diversos lugares del mundo, con el objetivo, en la mayoría de los casos, de fortalecer la construcción de una ciudadanía plena (11). La idea en general, defiende la asignación de un ingreso o renta básica para todos los ciudadanos de la nación, definiéndose como un derecho universal, incondicional y de duración indefinida.

La idea de la renta mínima o ingreso ciudadano fue, en cierto sentido, defendida en nuestro país por la CTA y el Frenapo (Frente Nacional contra la Pobreza) en su campaña y consulta popular en pos de un ingreso ciudadano por hijo en diciembre de 2001, propuesta que finalmente no prosperó puesto que la crisis de finales de dicho año produjo cambios importantes en el escenario político y social, dando por tierra con los debates, expectativas y dudas generadas. También el ARI (Argentinos por una República de Iguales, partido político que lidera Elisa Carrió), por su parte, presentó durante el año 2004 un proyecto de ley para la creación de un fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez (INCINI). El INCINI consistiría en una suma de dinero uniforme, abonado mensualmente, para cuyo acceso no se establecen condicionantes o requisitos adicionales, sea por parte de los beneficiarios directos (los niños y niñas) como de sus padres o tutores.

Estas propuestas son consideradas por sus promotores como un primer paso para revertir las estrategias que se vienen aplicando en el campo económico y social, considerando que se trata de una mejor herramienta para que las personas en situaciones de pobreza puedan comenzar a revertir su situación y al mismo tiempo integrarse con el resto de los miembros de la sociedad. También, se entiende que es una mejor política que las actuales para aliviar los problemas derivados del desempleo y subempleo, con signos redistributivos.

Podemos decir que este tipo de propuestas genera grandes debates. Puede ser considerada como una nueva forma de distribución de la riqueza; mero programa contra la pobreza; vehículo para permitir una "salida de emergencia" al sistema capitalista, ante la crisis que supone el abandono de la *sociedad salarial* (Castel, 1997) y niveles preocupantes y escandalosos de pobreza y exclusión. Hay quienes ven la implementación del ingreso mínimo ciudadano como una alternativa distinta, que implica una lógica redistributiva y una forma de asegurar la igualdad, justicia y ciudadanía plena de todas las personas. Sin embargo, también puede ser analizada como un camino que permite a quienes tienen empleo no verse obligados a compartirlo y condena a

los excluidos del mercado de trabajo a resistir su situación, desde la aparente garantía de lograr sobrevivir *sin trabajo* (Del Bono, 2002). De esta forma, la cuestión del empleo pasaría a un segundo plano, garantizado el mínimo ingreso a la población, amén de permitir, en última instancia, la reproducción del sistema capitalista y los valores que los sustentan, contrarios a los pregonados por la base moral de la propuesta: la solidaridad y la igualdad.

Palabras finales

Estructuralmente, y analizando la historia reciente de nuestro país, podemos afirmar que las organizaciones de desocupados han desempeñado un rol político de cierta importancia, siendo esto claro tanto para sí mismos como para los distintos gobiernos que lideraron los destinos del país desde finales de los años noventa.

El rol del movimiento piquetero como articulador de la oposición política queda manifiesto fundamentalmente a partir del lanzamiento de sendos planes de lucha por parte de la reseñada Asamblea de La Matanza, que convoca durante el transcurso del año 2001 al conjunto de los sectores sociales y políticos que se enrolaban en la oposición. Luego de esta experiencia se puede observar una posterior fragmentación y diversificación del movimiento.

Podemos afirmar que el movimiento piquetero se consolida, en parte, por la incapacidad de la oposición política partidaria y, por otro lado, por el desmantelamiento relativo de la estructura punteril del PJ para la atención de la pobreza.

En dicho proceso de consolidación, los desocupados organizados asumen la lucha reivindicativa combinándola con la lucha política, impugnando políticas que considera responsables del hambre y la desocupación, como las recetas fondomonetaristas, el pago de la deuda externa, las privatizaciones, etc., Se puede tomar el 26 de junio del 2002 como el momento culminante de este rol, donde el movimiento es interpelado por el gobierno de entonces, a expensas del riesgo de pérdida de la gobernabilidad.

El gobierno actual, con su intención de acabar con los planes transitorios de empleo, pretende, en términos de producir mayores márgenes de gobernabilidad, quitarle a los “opositores” la herramienta que los articula, los organiza, les da unidad (los planes); aunque en términos reales estos planes “piqueteros” expresan menos del 10% del total, el resto está distribuido entre punteros políticos y beneficiarios de favores políticos, que le permiten construir al gobierno parte de su propia estructura de poder.

Por otro lado, a través de dicha intención el Estado argentino se aleja del reconocimiento de la necesidad de instrumentar herramientas en pos de garantizar el derecho universal de inclusión social en nuestro país, definido por muchos autores como un ingreso ciudadano, ingreso universal o renta básica. Sin duda, y tal como ya fue desarrollado, estas propuestas presentan numerosas paradojas y dilemas que atraviesan las propuestas y posibles salidas de algunos sectores del movimiento piquetero.

Uno de los grandes aportes del movimiento piquetero es precisamente “el piquete”. Muy lejos de resultar asimilable por el gobierno, más lejos de funcionalizarse, cuando reaparece con las formas originales resulta un elemento de expresión del conflicto y un arma efectiva a la que el gobierno suele ceder. Como expresamos más arriba, los ejemplos de los cortes protagonizados por los trabajadores de la empresa ex Gándara, los vecinos de Gualeguaychú o los trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras vienen a mostrar cómo sectores sociales diversos asumen este repertorio de acción (12).

Pero creemos que el rol fundamental del movimiento piquetero, hoy en Argentina, es mantener latente la problemática de la desocupación y la miseria como necesidad de agenda de Estado.

En un marco político desfavorable para las luchas populares, en particular para las de los desocupados, creemos que el movimiento piquetero muestra a la vez su valor y sus limitaciones; su condición de herramienta valiosa en pos de organizar y dar voz a aquellos marginados por el actual modelo socioeconómico, pero a la vez, su condición de herramienta insuficiente para transformar y actualizar su capacidad disruptiva, su potencial orientación hacia el cambio.

Dentro de dichas limitaciones, coincidimos con Svampa cuando señala la fragilidad de las instancias de coordinación política, amén de la evaluación de un marco político nacional complejizado y un contexto de fragmentación creciente de las organizaciones piqueteras (Svampa, 2005: 259).

En sus comienzos, estos movimientos alentaron esperanzas que asociaron sus formas, metodologías y objetivos con el nacimiento de un nuevo horizonte político, con la posibilidad de practicar lógicas políticas que discutían y cuestionaban las tradicionales prácticas partidarias. En el marco de la crisis desatada en el año 2001 y, junto con las expresiones assemblearias de los vecinos de barrios de clase media, alentaron esperanzas de instaurar una nueva institucionalidad, esperanzas que finalmente no fueron colmadas, al no poder o no saber dotarlas de contenido político concreto y positivo.

Como nos dice Alejandro Grimson, la relevancia y características del radicalismo político es aún un tema inconcluso, abierto por las dimensiones de la crisis, una posible hipótesis es que ese radicalismo, expresado en la posibilidad de alianza entre la izquierda, los sectores medios y los piqueteros que alumbró las jornadas de diciembre de 2001 y durante un tiempo cultivó ciertas esperanzas, haya llegado a su propio límite dentro de los marcos actuales (Grimson, 2003:81).

Casi todas las organizaciones piqueteras en sus comienzos apuntaban al desarrollo territorial en los barrios donde se asentaron,

atendiendo las demandas de aquellos ignorados y marginados no sólo en términos económicos sino sociales y políticos, buscando representarlos, abrirles un espacio social y político inédito para ellos. Hoy por hoy, debe ser señalado como elemento destacado el debilitamiento relativo de la capacidad de dichas organizaciones de erigirse en canal de expresión de los sectores populares agredidos por la política económica.

Todas sus características originarias pueden ser interpeladas en la actualidad a la luz de la nueva situación nacional y de las nuevas notas distintivas de los movimientos sociales hegemónicos en nuestro país y presentan el riesgo constante de convertirse (una vez más) en la experiencia de la desilusión para los anhelos de participación y capacidad de decisión e injerencia de las clases populares argentinas.

Creemos que los movimientos piqueteros atraviesan un momento de transición, donde se abren diversas posibilidades de desarrollo. En primer lugar, algunas organizaciones se han incorporado definitivamente a la estructura o, al menos a la lógica, estatal y muchas otras se encuentran atravesando dicho camino; otras representan a organizaciones subordinadas a partidos u organizaciones políticas que definen su rol, alcances y rasgos y podemos pensar que existen posibilidades –al menos remotas- de que algunas de ellas se desarrollen como movimientos con horizontes emancipatorios como lo fueron otras expresiones de movimientos sociales en el mundo.

Reconocemos los vicios y limitaciones que al interior de estas mismas organizaciones se han producido, actualizado y reproducido. También atendemos a las dificultades encontradas para generar valores nuevos de organización popular, sin coacción, sin chantajes, sin reproducción de intereses personales y advertimos los obstáculos para lograr la unidad de un movimiento, que, por el contrario, vive y se desvive en reyertas egoístas, trezado por acusaciones permanentes de traición y abandono de espacios y símbolos disputados por unos y otros.

Es probable que no sea este movimiento piquetero el llamado a ser el nuevo movimiento social disruptivo y emancipatorio que en sus comienzos pudo esperarse. No obstante, no podemos dejar de observar que las organizaciones de desocupados contienen elementos de una novedosa experiencia y práctica social y política.

Sin otra alternativa que recurrir a la marcha o el piquete para expresarse, sin trabajo, sin cobertura de salud, sin aportes previsionales, sin sindicatos ni partidos que los representen cabalmente, agredidos en ocasiones por los medios masivos de comunicación y rechazados por algunos sectores de la sociedad argentina que los repudian en la liviana e irresponsable actitud del desprecio a lo grotesco, a lo antiestético, a lo diferente, a lo que habita en los márgenes territoriales y sociales: los piqueteros vienen a decir en la Argentina del crecimiento económico que esta sociedad sigue excluyendo a una importante porción de la población, que tendrá que ser contemplada por una política de estado, estratégica, de inclusión social.

Seguramente con otras formas políticas y organizativas, dependiendo de otros recursos para su subsistencia, es innegable que en los piqueteros de hoy está el antecedente del nuevo movimiento social que atienda a la realidad de pobreza y desocupación que continúa siendo el principal y acuciante problema de millones de argentinos y argentinas.

Notas

(1) Como señalan Lobato y Suriano, al analizar la situación de los sindicatos en la década del noventa: “Los sindicatos son numéricamente débiles, su capacidad de movilización, de presión y poder económico ha disminuido y buena parte de su acción ha quedado concentrada en los gremios de servicios, afectados por la racionalización estatal”. Lobato, Suriano (2003:16).

(2) Acerca de los acontecimientos y crisis de finales del año 2001 pueden ser consultados, entre otros, Naishtat, et al. (comp. 2005); Auyero (2002); Cafassi (2002); *El rodaballo*. Revista de Política y Cultura (2004, N° 15); *Revista Theomai. Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo*. Número especial (invierno 2002).

(3) Además de la CTD-AV se pueden contar entre estas últimas al MTR CUBa y, en algunas ocasiones, a la FTC y el Movimiento 29 de Mayo (M29).

(4) Declaraciones de Oscar Parrilli, Secretario General de la Presidencia tomadas de Página/12 y La Nación en diversas notas de octubre-noviembre del 2003.

(5) Ver nota: Página /12 “Idas y vueltas sobre los invisibles”, Mario Wainfeld, 2 de noviembre de 2003.

(6) El Plan Familias tendrá una asignación de entre 150 y 275 pesos, según la cantidad de hijos. El seguro de desempleo supone un aumento de 75 pesos y llevará la asignación a 225 pesos. Estará controlado por el Ministerio de Trabajo y los beneficiarios deberán realizar capacitación y buscar trabajo.

(7) El hecho aconteció el día 22 de octubre de 2003 y fue protagonizado por el Movimiento de Unidad Popular (MUP), Frente Unido de Trabajadores Desocupados y Ocupados (Futradeyo), Movimiento de Unidad Popular 20 de diciembre (MUP 20) y Tendencia Clasista 29 de Mayo (TC 29) quienes bloquearon las puertas del Ministerio de Trabajo en reclamo de ser atendidos.

(8) Ver nota sobre anuncio de Alberto Fernández, en Clarín, martes 28 de octubre de 2003: “El Gobierno lanzó su ofensiva y los piqueteros más duros van a la Plaza”.

(9) El 16 de julio de 2004 se realiza una manifestación en la ciudad de Buenos Aires contra la reforma del Código de Convivencia, en la cual pudieron verse escenas de mucha violencia ejercida por los manifestantes ante las cuales la policía permanecía impávida. Hubo cuantiosos destrozos y, de hecho, se impidió la sesión legislativa del día. Luego de varias horas intervino la policía y fueron detenidas estas dieciséis personas que son las que quedaron como

responsables penales de lo sucedido aquel día.

(10) Con esta idea se presenta un dossier publicado en la Revista El Rodaballo (Año XII, N° 16, Verano 2006), respecto a este tema: Ingreso universal: ¿un camino hacia la ciudadanía plena?

(11) Incluso negándose a ser considerados piqueteros: los habitantes de Entre Ríos se autodenominan ambientalistas y los trabajadores de Las Heras defienden su condición de “petroleros activos”.

Bibliografía

AUYERO, Javier (2002) *La protesta. Relatos de la beligerancia popular en la Argentina Democrática*. Libros del Rojas. Buenos Aires.

CAFASSI, Emilio (2002) *Olla a presión cacerolazos, piquetes y asambleas, sobre fuego argentino*. Libros del Rojas. Buenos Aires.

CASTEL, Robert (1997) *Las metamorfosis de la cuestión social*, Ed. Paidós, Buenos Aires.

DEL BONO, Cecilia (2002) “Renta Mínima Garantizada y Seguro de Empleo y Formación en Argentina. Notas para la discusión”. Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional de Políticas Sociales. “Estrategias de articulación de políticas, programas y proyectos sociales en Argentina” Asociación Argentina de Políticas Sociales, UNQ, Bernal, 30 y 31 de Mayo de 2002.

El rodaballo. Revista de Política y Cultura (2004), N° 15, Buenos Aires.

GRIMSON, Alejandro (2003) *La Vida Organizacional en Zonas Populares de Buenos Aires*. Informe Etnográfico para “The New Comparative Study on Urbanization and Models of Development in Latin America”.

LOBATO, Mirta y Suriano, Juan (2003) *La protesta social en Argentina*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

MELUCCI, Alberto (1994) “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, en *Zona Abierta*, N° 69.

MINUJIN, Alberto (editor) (1993) *Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo*. Editorial UNICEF/Losada, Buenos Aires, 1993.

MUNCK, Gerardo (1995) “Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales”, en *Revista Mexicana de Sociología*, N° 3.

NAISHTAT, et al. (comp.) (2005) *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires, Prometeo.

OFFE, Claus. (1992) *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*. Editorial Sistema, 1º reimp.

PÉREZ, Pablo Ernesto (2006) “Tensiones entre la política macroeconómica y la política de ingresos en la Argentina post-Convertibilidad.” En *Laboratorio* • Año 8 N° 19 • Otoño / Invierno.

Revista Theomai. Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo. Número especial (invierno 2002). Buenos Aires, UNQ.

ROLDÁN, Fernando Pedro y Hnatiuk, Aníbal Rolando (2004) “La criminalización de la protesta social y los nuevos actores” En *Derecho Penal Online* (revista electrónica de doctrina y jurisprudencia en línea). Año 2004. Mes diciembre, citado el 20/03/2006. Disponible en Internet: <http://www.derechopenalonline.com>

SVAMPA, Maristella (2005) *La sociedad excluyente*. Taurus, Buenos Aires.

TARROW, Sidney (1997) *El poder en movimiento. Los nuevos movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Editorial Alianza. Madrid.

TILLY, Charles (1985) “Modelos y realidades de la acción colectiva popular”, en *Zona Abierta*, Vol. 58, N° 4.